

ORDEN de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura por la que se concede una subvención directa con abono anticipado, y por razones de interés general, a favor del Cabildo de Fuerteventura, por importe de cien mil euros (100.000, €), destinados a financiar el proyecto de espacios majos del cabildo de Fuerteventura

Examinado el expediente de referencia Capítulo VII n.º5/2025, tramitado por el Servicio de Patrimonio Cultural.

Vista la propuesta de fecha 16 de octubre del 2025 formulada por el Director General de Cultura y Patrimonio Cultural, relativa a la concesión de una subvención directa a favor del Cabildo de Fuerteventura, para financiar el proyecto “Espacios Majos” y de acuerdo con los siguientes,

Teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

1º En la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, se consigna la aplicación presupuestaria 1707 337A 7600400 – Línea de actuación 247G0199, denominada “Recupera Canarias”, dotada con quinientos mil euros (500.000 €).

2º De conformidad con lo anterior, la partida presupuestaria “Recupera Canarias” tiene como objetivo impulsar proyectos orientados a la recuperación, puesta en valor, conservación y difusión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en el marco de las políticas públicas de protección cultural de Canarias.

Esta línea de actuación se concibe como un instrumento estratégico para garantizar la preservación del legado histórico y artístico, fomentar el conocimiento social del mismo y contribuir al desarrollo sostenible del territorio mediante la activación cultural. En este sentido, se financian proyectos que generen impactos duraderos en la protección y valorización del patrimonio, asegurando que las intervenciones realizadas redunden en beneficio del interés general y en la salvaguarda de los bienes que integran la identidad cultural canaria.

3º Con fecha 23 de julio de 2025, se remite oficio por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural a la entidad local referenciada anteriormente, de “Notificación de disponibilidad presupuestaria, en concepto de subvención directa por razones de interés público y requerimiento de documentación necesaria para su tramitación”.

4º Con fecha 1 de agosto del 2025, Don Rayco León Jordán, en calidad de Consejero del Área de Cultura, Patrimonio Cultural e Innovación del Cabildo de Fuerteventura, con NIF P3500003CF, presenta solicitud acompañada de la correspondiente documentación, para la obtención de la subvención directa destinada a financiar los gastos correspondientes en relación con el proyecto “Espacios Majos” según memoria presentada y previsión de ingresos y gastos.





Entre la documentación presentada figura una solicitud de abono anticipado, de fecha 31 de julio, de la totalidad de la subvención disponible, por importe de cien mil euros (100.000 €), lo que representa el 100% del coste total del proyecto.

5º Con fecha 23 de septiembre, Don Rayco León Jordán, remite información más detallada relativa al plan financiero estimativo de ingresos y gastos del proyecto “Espacios Majos”.

6º Consta en el expediente el documento contable de retención de crédito (RC) debidamente contabilizado con n.º de captura 2025/0000309193, por importe de por importe de cien mil euros (100.000 €), con cargo a las aplicación presupuestaria referenciada al inicio, quedando acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente en el estado de gastos del presupuesto para atender las obligaciones económicas derivadas del expediente.

7º Consta en el expediente certificado de la Oficina Presupuestaria n.º 323/2025, de fecha 21 de julio, acreditativo del cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.1 del Acuerdo de Gobierno de Canarias de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, en los términos de su última modificación.

8º Mediante Orden n.º 682/2025, de 22 de septiembre, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, que incorpora como subvención directa el proyecto “Espacios Majos”. De esta manera se responde a la necesidad Impulsar la realización de excavaciones arqueológicas, la elaboración de proyectos de conservación y la difusión del patrimonio aborigen mayorero, con el fin de garantizar la protección y transmisión de este patrimonio, en cumplimiento de la normativa vigente y como prioridad estratégica de interés general.

9º Por la Dirección General de Asuntos Europeos se emitió informe favorable, de fecha 1 de octubre de 2025, en el que se hace constar que la Orden es compatible con la normativa europea que limita la concesión de ayudas públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; y en el artículo 4 del Decreto 100/1999, de 25 de mayo, de medidas para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias que limitan la concesión de ayudas de Estado.

10º La entidad solicitante no tiene reintegros pendientes con la Administración pública de esta Comunidad Autónoma, según consta en el expediente tras la consulta realizada por el centro directivo tramitador de esta subvención, a través del Sistema de Control Interno de Subvenciones Pendientes de Justificar, en fecha 14 de octubre de 2025.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. El artículo 46 de la Constitución Española impone a los poderes públicos el deber de proteger, conservar y enriquecer el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. En cumplimiento de este mandato de interés público, las administraciones pueden conceder subvenciones directas, a fin de poner en valor los bienes culturales que conforman la identidad colectiva y el legado histórico común.





En el ámbito autonómico, el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, refuerza esta obligación al imponer a los poderes públicos el deber de velar por el patrimonio cultural de las islas y promover las acciones y medidas necesarias para su protección, conservación y difusión.

En desarrollo de este mandato, el Título IX de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, establece medidas de fomento orientadas a la conservación, investigación, documentación, recuperación, restauración, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de las islas, siempre dentro del marco de las disponibilidades presupuestarias. En este sentido, el artículo 126 de dicha norma reconoce expresamente las subvenciones y ayudas como instrumentos de fomento, sometiéndolos a la legislación específica en la materia conforme a lo dispuesto en el artículo 127.

Las entidades locales, como administraciones más próximas al patrimonio cultural, desempeñan un papel esencial en su custodia, protección, conservación y difusión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 11/2019. Su cercanía a los bienes patrimoniales les otorga una posición privilegiada para velar por su integridad, asegurando la transmisión de los valores culturales a futuras generaciones. En este sentido, las corporaciones locales tienen la obligación de comunicar al departamento competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias cualquier hecho que pueda suponer un riesgo para la preservación de estos bienes, garantizando una respuesta ágil y coordinada ante posibles amenazas.

Además, conforme al artículo 16.p de la misma ley, los cabildos insulares tienen la responsabilidad específica de promover la difusión del patrimonio cultural en su ámbito territorial. Esto implica no solo la divulgación del conocimiento sobre los bienes patrimoniales, sino también la implementación de estrategias y programas que fomenten la participación ciudadana en su conservación y puesta en valor. Para ello, el artículo 14 k) de la Ley 11/2019 establece que, en el marco de sus respectivas competencias, las administraciones públicas de Canarias, respecto del patrimonio cultural de Canarias, deberán *“apoyar y colaborar con las entidades y asociaciones culturales comprometidas con la recuperación, conservación, difusión y gestión del patrimonio cultural”*.

Segunda. El régimen jurídico aplicable a la subvención se encuentra en la normativa básica estatal recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley 38/2003), de conformidad con lo previsto en su disposición final primera; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, que será aplicable en lo que respecta a su normativa básica conforme a su disposición final primera; en la Ley territorial 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en adelante, Ley 11/2006); y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 36/2009) en todo lo que no regule y contradiga la legislación básica estatal.

Tercera. El apartado 1 b) del artículo 21 del citado Decreto 36/2009, establece que las subvenciones directas pueden ser *“con carácter excepcional aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”*.

Por su parte, el artículo 22.2 c) de la Ley General de Subvenciones, dispone que podrán concederse de forma directa *“con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten*





razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”

Cuarta. Considerando las razones de interés general que concurren en el proyecto presentado por el Cabildo de Fuerteventura, así como la idoneidad de éste para ser receptora de la subvención, en los términos previstos en los referidos artículos 21.1 b) y 22.2 c), procede la siguiente justificación:

- La ausencia de concurrencia viene justificada por el hecho de que, en este caso, el proyecto “*Espacios Majos*” impulsa excavaciones arqueológicas, la elaboración de proyectos de conservación y la difusión del patrimonio aborigen majorero, en especial de los yacimientos y manifestaciones rupestres. Se trata de una iniciativa estratégica orientada a la documentación, preservación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Fuerteventura, con atención especial a los elementos vinculados a la cultura maho. La protección del patrimonio arqueológico no solo constituye una obligación legal, sino también una prioridad estratégica de interés general, que requiere planificación, continuidad y una respuesta inmediata ante riesgos de deterioro. La singularidad del proyecto y la vinculación directa con el Cabildo de Fuerteventura justifican la financiación directa, al ser la administración competente y con capacidad operativa en el territorio

- Desde una perspectiva de interés público, económico y social, la actuación prevista reviste una clara relevancia estratégica para Fuerteventura, al promover la investigación y conservación del patrimonio arqueológico insular, generando impactos positivos en la comunidad científica, el sector educativo y la ciudadanía en general. Asimismo, contribuye a la dinamización socioeconómica mediante el estímulo de la actividad investigadora y profesional en torno a la arqueología, el fomento del turismo cultural y la creación de contenidos para la divulgación y la educación patrimonial.

En atención a lo expuesto, concurren en la presente subvención tanto razones de interés público, económico y social como las circunstancias que justifican su carácter singular, lo que legitima su concesión directa conforme a la normativa aplicable.

Quinta. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.5 del Decreto 36/2009, el acto de concesión o, en su caso, el convenio suscrito para su ejecución tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión. Además, según lo establecido en el apartado 6 del mismo artículo, el contenido de la resolución de concesión o del convenio coincidirá con el previsto en el citado Decreto para las bases reguladoras, con excepción de aquellos requisitos que resulten incompatibles con su naturaleza de concesión directa.

Sexta. El artículo 4 del Decreto 36/2009, establece que “*los requisitos para obtener la condición de beneficiario y de entidad colaboradora serán los establecidos en los preceptos básicos contenidos en la Ley General de Subvenciones y su acreditación se hará en la forma que determina su Reglamento*”. En este sentido, el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones establece, entre otros, que “*podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurren las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria*”.

Séptima. El artículo 37.3 del Decreto 36/2009, establece la posibilidad de realizar pagos anticipados en proyectos de naturaleza económica que presenten circunstancias acreditadas de especial interés





público, así como en aquellos que se concedan a entidades sin ánimo de lucro o a otras entidades beneficiarias que carezcan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la actividad subvencionada. En este sentido, cabe señalar que el artículo 38.8 a) de la misma norma prevé la exoneración de constitución de garantías a *las administraciones públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades mercantiles y fundaciones pertenecientes al sector público autonómico, así como análogas entidades del Estado o de las corporaciones locales*, como es el caso de Cabildo de Fuerteventura.

En este caso, la entidad beneficiaria desarrolla actividades que implican acciones de interés general superior, alineadas con la protección y difusión del patrimonio cultural y la cultura en Canarias, contribuyendo al cumplimiento de objetivos de interés público y de interés general de la cultura y el patrimonio cultural, en consonancia con el mencionado artículo 46 de la Constitución Española; el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias; y el Título IX de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 del Anexo del Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2024, por el que se modifica por undécima vez el Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, autoriza **el abono anticipado de subvenciones directas** hasta el 100% de su cuantía, siempre que concurren los siguientes requisitos:

“(…)- Que la ejecución de la actividad y su justificación se produzcan antes de la finalización del siguiente ejercicio presupuestario al de la concesión.

- Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos o encomiendas con abono anticipado pendientes de justificación en los dos ejercicios inmediatos anteriores

En este sentido, de conformidad con lo señalado en el Antecedente Séptimo, se ha verificado el cumplimiento de este último requisito mediante el correspondiente certificado emitido por la Oficina Presupuestaria, que acredita que la entidad beneficiaria ha justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas en los dos ejercicios anteriores, constando dicha justificación debidamente registrada en el módulo de subvenciones del Sistema Económico Financiero y Logístico de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogiC).

Asimismo, la entidad beneficiaria ha manifestado su compromiso con el cumplimiento de los plazos de ejecución y justificación de la actividad subvencionada dentro del plazo previsto en el mencionado Acuerdo de Gobierno.

A la luz de lo expuesto, y habiéndose acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de los requisitos exigidos, procede acordar el pago anticipado de la subvención sin exigencia de constitución de garantía, en atención al interés público concurrente en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural, y con arreglo a la normativa citada.

Octava. El presente expediente está sometido a control financiero permanente, no siendo preceptivo el sometimiento a fiscalización previa, en virtud de lo previsto en el artículo 130.3 y 132.e) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; la Disposición adicional primera del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y





Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias; y el Acuerdo de Gobierno, de 3 de febrero de 2025, por el que se suspende, para determinados ámbitos de gestión, expedientes y sujetos integrantes del sector público, la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente, para el ejercicio 2025.

Novena. Corresponde a la persona titular del Departamento la competencia para dictar la Orden de concesión, a tenor de lo preceptuado en el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; el artículo 29.1.j) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, correspondiendo a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, de conformidad con el artículo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Décima. Resulta de aplicación el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) que establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Ambos recursos son excluyentes de manera que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

El plazo de interposición del recurso de reposición será de un mes en virtud de lo previsto en el artículo 124 de la LPAC, a contar desde el día siguiente a la notificación. Para el cómputo de los plazos se estará a lo previsto en el artículo 30.4 de la LPAC. El plazo para el interponer recurso contencioso administrativo será de dos mes a contar desde el día siguiente a la notificación de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de que el recurso de reposición se interponga por medio de representante deberá acreditarse la representación conforme al artículo 5 de la LPAC.

En su virtud,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobación del gasto, entidad beneficiaria y cuantía.

1. Se aprueba el gasto y se concede a favor del Cabildo de Fuerteventura una subvención directa con abono anticipado, y por razones de interés general, por importe de cien mil euros (100.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1707 337A 7600400 – Línea de actuación 247G0199, denominada “RECUPERA CANARIAS”.

2. Dicha subvención cubre el 100% del coste de la actividad subvencionada y se otorga con la finalidad de fomentar la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural e histórico de Canarias, en cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en la normativa vigente en materia de patrimonio cultural.

SEGUNDO. Destino de la subvención.

1. La presente subvención tiene por objeto impulsar la investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico aborigen de Fuerteventura, con el objetivo de asegurar su protección





integral y garantizar su valorización, salvaguarda y transmisión a las generaciones presentes y futuras. De acuerdo con la memoria, la actuación consiste en:

La realización de intervenciones arqueológicas en yacimientos representativos de Fuerteventura, la aplicación de medidas de conservación y protección de los mismos, el fomento de la investigación interdisciplinaria y la puesta en marcha de acciones de difusión y transferencia del conocimiento orientadas a la ciudadanía, la comunidad científica y el sector educativo.

2. Serán gastos subvencionables aquellos gastos corrientes que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de los proyectos de protección, conservación, difusión y valorización del patrimonio cultural impulsados por la entidad beneficiaria.

3. Únicamente serán objeto de subvención aquellos gastos efectivamente pagados por la entidad beneficiaria durante el plazo de ejecución de la subvención, conforme a lo previsto en el resuelto tercero.

4. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

5. Solo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de tres mil euros (3.000,00 €) por expediente.

Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de mil euros (1.000,00 €) establecida en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación en materia de contratación administrativa para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

7. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, para el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar los bienes objeto de subvención al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un periodo no inferior a dos años.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.





El incumplimiento de la obligación de destino se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, y será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

TERCERO. Plazo de realización de la actividad.

La actividad subvencionada deberá ser realizada entre el 15 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

CUARTO. Obligaciones del beneficiario.

La entidad beneficiaria quedará sujeta a las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

- a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
- b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
- d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
- e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
- f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
- g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, y por tiempo no inferior a cuatro (4) años computándose desde el momento en el que venza el plazo para presentar la justificación de la presente subvención.





h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Además, serán obligaciones de la entidad beneficiaria las siguientes:

a) En las cuentas específicas, dentro de la contabilidad oficial de la entidad financiera, o en los registros se han de reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del IGIC e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión, la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aunque sólo una parte del coste estuviera subvencionada.

b) En cualquiera de las medidas de difusión que sean elegidas por el beneficiario con el fin de dar a conocer el carácter subvencionable del programa, durante el tiempo de su ejecución, se deberá incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

A tal fin, y atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, la identidad corporativa que deberá tener en cuenta el beneficiario, será la siguiente:

Modelo 1 color



Modelo 1 color para fondo negro



Modelo 1 positivo



Modelo 1 negativo





El beneficiario podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:

<http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/>

- c) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la presente Orden.
- d) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, entes públicos, entidades privadas o particulares.
- e) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
- f) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 de la citada Ley General de Subvenciones en relación con el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con el beneficiario.
- g) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia entre el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.
- h) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y garantías de los derechos digitales y demás normativa de aplicación.
- i) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, tal y como dispone el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al encontrarse dentro de su ámbito de aplicación, de conformidad con el artículo 2.1.a) del mismo texto legal.

QUINTO. Modificación de la Orden de concesión de la subvención.

La modificación de la Orden de concesión podrá ser acordada por el órgano concedente que la haya dictado, siempre que se realice antes de la finalización del plazo establecido para la ejecución de la actividad subvencionada y sin que, en ningún caso, se altere el destino o la finalidad de la subvención otorgada. Dicha facultad se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 20 del Decreto 36/2009.

SEXTO. Prohibición de concertar por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria.

De conformidad con el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 35.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con:





a) Personas o entidades incursoas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario de una subvención.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurren las siguientes circunstancias:

1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

2ª. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.

3ª. Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concorra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 6 /2023, de Mercado de Valores y los Servicios de Inversión, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.





f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las primeras.

Dicho extremo será acreditado por el beneficiario en el procedimiento de justificación de la subvención mediante una declaración responsable en la que se haga constar que no se ha concertado la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguna de las personas o entidades referidas en el mismo, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que pueda realizar el órgano concedente, la Intervención General o cualquier otro órgano de control.

SÉPTIMO. Abono, justificación, exoneración de constitución de garantía y comprobación en relación con la subvención.

1. El abono se hará efectivo de manera anticipada.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.

En aplicación del artículo 38.8 a) del Decreto 36/2009, la beneficiaria está exenta de la obligación de constituir garantía para el abono anticipado de la subvención, por tratarse de una administración pública.

2. El plazo para la justificación de la presente subvención será de DOS (2) MESES, a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad (concluyendo el 31 de diciembre de 2026), de acuerdo con el artículo 23.1 del Decreto 36/2009.

3. El Cabildo de Fuerteventura, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, aportará como medio de justificación de la subvención una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas.

4. El órgano concedente comprobará la documentación correspondiente presentada en el trámite de justificación que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de al menos dos (2) abonos de los reflejados en la documentación correspondiente, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario





de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Conforme a lo previsto en el artículo 26.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo: *"Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Por documento de valor probatorio equivalente se entiende, cuando la emisión de una factura no proceda con arreglo a las normas fiscales y contables, todo documento presentado para justificar que la anotación contable ofrezca una imagen fiel de la realidad y sea conforme a las normas vigentes en materia de contabilidad"*.

El órgano concedente comprobará la documentación correspondiente presentada en el trámite de justificación que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.

La comprobación del órgano concedente recaerá sobre los siguientes extremos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.3 del Decreto 36/2009:

- a) La realización de la actividad subvencionada.
- b) El empleo de los fondos percibidos en el desarrollo de la actividad subvencionada.
- c) El coste real de la actividad subvencionada.
- d) La concesión de otras subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.
- e) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada.
- f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por las normas reguladoras de que se trate, así como los establecidos en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

5. De igual forma, el órgano concedente de la subvención y la Intervención General podrán comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionables, entendiendo como valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 del mencionado Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Para determinar dicho valor se podrán utilizar los siguientes métodos:

- a) Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de otros de características similares, efectuando, en este caso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, así como para considerar las particularidades de la operación.
- b) Supletoriamente, resultarán aplicables:
 - a') Precio de venta de bienes y servicios calculado mediante el incremento del valor de adquisición o coste de producción de los mismos en el margen que habitualmente se obtiene en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que





habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes.

b') Precio de reventa de bienes y servicios establecido por el comprador de los mismos, minorado en el margen que habitualmente obtiene el citado comprador en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes, considerando, en su caso, los costes en que hubiera incurrido el citado comprador para transformar los mencionados bienes y servicios.

c) Cuando no resulte aplicable ninguno de los métodos anteriores, se aplicará el precio derivado de la distribución del resultado conjunto de la operación de que se trate, teniendo en cuenta los riesgos asumidos, los activos implicados y las funciones desempeñadas por las partes relacionadas.

6. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, se dictará Orden de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura que declare, en su caso, justificada total o parcialmente la subvención.

7. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.

OCTAVO. Devolución a iniciativa de la entidad beneficiaria.

Se podrán realizar devoluciones voluntarias a iniciativa del beneficiario, bien de una determinada cantidad del importe subvencionado, bien de la totalidad del importe concedido por renuncia, sin necesidad de requerimiento previo de la Administración.

Cuando se produzca dicha devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

El pago de la deuda se efectuará por ingreso en entidad bancaria, siendo necesario en este caso cumplimentar el Modelo 800 disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, en el apartado Ingresos no tributarios en el siguiente enlace:

<https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod800/formulario.jsp>

Una vez cumplimentados los datos identificativos en el apartado Obligado al Pago, se ha de señalar en el apartado Liquidación, el concepto 130.- Reintegro de subvenciones e intereses de subvenciones, debiendo cumplimentar igualmente en el apartado Observaciones, el número de expediente y el período del que trae causa.

El abono se realizará a través de una entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria.





Efectuado el ingreso, el ejemplar "*para la Administración*" del modelo 800 deberá presentarse ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural.

NOVENO. Régimen aplicable a los procedimientos de reintegro.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos que se indican a continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del programa o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

En caso de incumplimiento total, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación por el beneficiario.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En este caso, deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la citada Ley General de Subvenciones, en relación con los artículos 11 y 12 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y con la legislación reguladora de la transparencia.

En este caso, procederá el reintegro del 10% de la cantidad percibida.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.





f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el programa o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

En caso de incumplimiento total, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación por el beneficiario.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En caso de incumplimiento total, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación por el beneficiario.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. Los criterios de graduación indicados serán de aplicación cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

4. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo regulado en el capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, regulador de las subvenciones de la Administración Pública de Canarias.

5. El derecho de la Administración a reconocer y liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años, en las condiciones previstas en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canarias.

DÉCIMO. Infracciones y sanciones administrativas.

La presente subvención directa se registrará, en materia de infracciones y sanciones, por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, en lo que resulte de aplicación por su carácter básico, de conformidad con la remisión establecida en el artículo 154 de la Ley 11/2006.





La prescripción de las infracciones y sanciones quedará sujeta a un plazo de cuatro (4) años, en las condiciones previstas en el artículo 65 de la citada Ley General de Subvenciones.

DÉCIMO PRIMERO. Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones.

1. La subvención objeto de la presente Orden será compatible con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados que obtenga la entidad beneficiaria para la misma o similar finalidad, en los términos establecidos en el artículo 34 del Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003. No obstante, la cuantía global de las subvenciones y ayudas percibidas no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada.

2. La entidad beneficiaria deberá declarar las ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que haya obtenido para la misma actividad en cualquier momento en que se le notifique la concesión de tal ayuda o subvención, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables. Asimismo, deberá comunicar a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias la obtención de los recursos citados, indicando su importe y procedencia, para garantizar la correcta coordinación y control de las ayudas otorgadas.

DÉCIMO SEGUNDO. Régimen jurídico aplicable a la subvención.

La subvención objeto de esta Orden se rige, en lo no previsto en la misma, por la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, en lo relativo a sus preceptos básicos, según lo dispuesto en sus respectivas disposiciones finales primeras; así como por la Ley 11/2006; y por el Decreto 36/2009, en todo lo que no regule o contradiga la legislación básica estatal.

DÉCIMO TERCERO. Notificación y aceptación.

Notificar la presente Orden a la entidad beneficiaria en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La entidad beneficiaria deberá manifestar su aceptación expresa en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación. En caso de que no se presente dicha aceptación en el plazo establecido, se entenderá que renuncian a la subvención concedida, quedando esta sin efecto.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

**LA CONSEJERA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA
E INNOVACIÓN Y CULTURA**
Migdalia María Machín Tavío

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MIGDALIA MARIA MACHIN TAVIO - CONSEJERO/A	Fecha: 12/11/2025 - 10:51:20
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
ORDEN - Nº: 825 / 2025 - Libro: 2629 - Fecha: 12/11/2025 11:44:06	Fecha: 12/11/2025 - 11:44:06
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0Ljy5CWfQF71Sdgtx6gAsXS2AlWMfHRMT	 
El presente documento ha sido descargado el 12/11/2025 - 13:02:26	